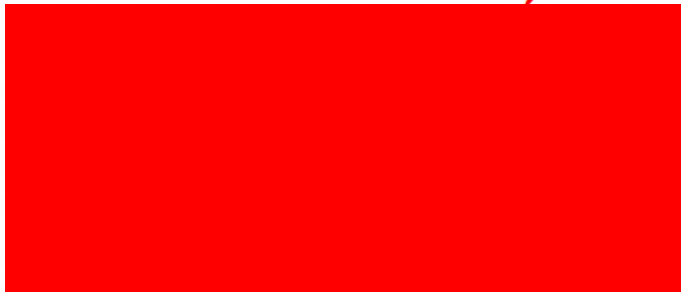




PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**AMPARO EN REVISIÓN:
R.C.118/2019.**

QUEJOSO Y RECURRENTE:



MAGISTRADO PONENTE:
MARCO POLO ROSAS
BAQUEIRO

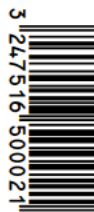
SECRETARIA: MAZARA
ALEJANDRA ESCOBAR
MANDUJANO

Ciudad de México. Acuerdo del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día trece de junio de dos mil diecinueve.

V I S T O para resolver, los autos del amparo en revisión al rubro citado; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda de amparo indirecto, y trámite ante el Juzgado de Distrito



1. Mediante escrito presentado el **doce de febrero de dos mil diecinueve**, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], por conducto de su apoderada [REDACTED]
[REDACTED], demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos que a continuación se precisan:

*“III. Autoridad responsable: El C. Juez Noveno de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad ordenadora y ejecutora.--- IV.- El Acto reclamado. Del C. Juez Noveno de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se reclama la sentencia interlocutoria” (sic) “dictada en fecha: veintiuno de enero de dos mil diecinueve en el expediente **2606/2018**, en el que se resuelve el recurso de revocación interpuesto por mi representada, declarándolo como infundado y confirmando el auto de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, por medio del cual la autoridad responsable admite la solicitud de providencias precautorias de retención de bienes, sin embargo fija una garantía a mi representada con completa contravención a lo establecido en disposiciones expresas previstas en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el artículo 4° del Código Federal de*



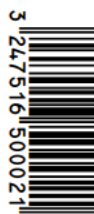
Procedimientos Civiles y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito”.¹

El acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 2606/2018, en la que declaró infundado el recurso de revocación que interpuso la quejosa, en contra del auto de **nueve de enero de dos mil diecinueve**, que dictó el Juez Noveno de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, en el que admitió a trámite las providencias precautorias solicitadas y le fijó una garantía por la cantidad de \$7,098.78 (siete mil noventa y ocho pesos 78/100 M.N.), por concepto de daños y perjuicios que se le ocasionaran a las futuras demandadas.

En la citada demanda de amparo, la parte quejosa adujo que se infringían en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; narró bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.²

¹ Foja 3 del expediente 123/2019-III.

² Fojas 3 a 9 del expediente 123/2019-III.



2. Por cuestión de turno, la referida demanda de amparo se remitió al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien mediante proveído de **catorce de febrero de dos mil diecinueve**, la registró con el número **123/2019-III**, admitió a trámite la demanda; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; requirió a la autoridad responsable su informe justificado; fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y no se formó incidente por no haberse solicitado.³

De las constancias que integran el juicio de amparo referido, se advierte que la autoridad responsable rindió su informe justificado, en oficio número **441**,⁴ y se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación.⁵

Seguido el juicio por su trámite correspondiente, el juez de Distrito **celebró la audiencia constitucional** respectiva⁶ y dictó sentencia el **once de marzo del año en curso**, en el

³ Fojas 35 a 37 del juicio de amparo.

⁴ Fojas 43 del juicio de amparo.

⁵ Foja 40 del juicio de amparo

⁶ Foja 45 idem

sentido de negar el amparo.⁷

SEGUNDO. Trámite de la revisión ante el Juzgado de Distrito

En contra de la determinación anterior, la quejosa [REDACTED]

[REDACTED] por conducto de su apoderada [REDACTED], interpuso el presente medio de impugnación, a través del escrito presentado el **veintiséis de marzo del dos mil diecinueve**, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.⁸

En proveído emitido el **veintiocho de marzo de dos mil diecinueve**, el Juzgador Federal tuvo por presentado el escrito por el que se interpuso el recurso de mérito; ordenando la remisión del escrito original de agravios al Tribunal Colegiado de este Circuito en turno, para la substanciación del recurso; todo ello en términos de lo previsto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo.⁹

⁷ Foja 45 vuelta a 67 vuelta.

⁸ Fojas 71 a 85 ídem

⁹ Foja 86 ídem.

Por oficio **281/2019**, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitió el escrito del recurso de revisión interpuesto en los autos del juicio de amparo indirecto **123/2019-III**, así como un tomo de pruebas¹⁰ y el **nueve de abril de dos mil diecinueve**,¹¹ la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, turnó a este Tribunal Federal el presente recurso de revisión.

TERCERO. Trámite del amparo en revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, hasta ponerlo en estado de dictar sentencia

1. Este Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, **admitió** el recurso de revisión por auto de Presidencia de **once de abril de dos mil diecinueve**; se registró con el número de expediente **RC.- 118/2019**; tuvo por recibido el oficio **281/2019**, al que se acompañó el original del escrito de agravios, y finalmente se ordenó notificar a las partes, lo que se verificó el doce de abril siguiente.¹²

¹⁰ Foja 2 del cuaderno de revisión.

¹¹ Papeleta contenida en la hoja 1 del cuaderno de revisión.

¹² Foja 18 y 19 ídem.



2. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo **92** de la Ley de Amparo y artículo **41**, fracción **II**, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnó el expediente al magistrado Marco Polo Rosas Baqueiro, para la formulación del respectivo proyecto de resolución.¹³

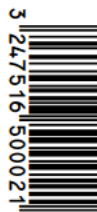
Así, quedó verificado que el asunto se encuentra listo para dictar la decisión judicial correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia

Este Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito es constitucional y legalmente **competente para conocer del presente amparo en revisión**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos **103, fracción I**, y **107, fracción VIII**, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **84** de la Ley de Amparo, **37**, fracción **II**, **38** y **144** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, con lo señalado en los **Puntos Segundo, fracción I, Punto 1**, y

¹³ Foja 22 ídem.



Tercero, fracción I, del Acuerdo General **3/2013** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, que precisa los órganos jurisdiccionales que componen este Circuito.

Lo anterior, porque en razón de **grado**, se interpone contra la sentencia emitida en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito; respecto a la **materia**, corresponde a la civil, que es del conocimiento de un Tribunal Colegiado especializado en la misma; y en cuanto al **territorio**, porque se controvierte una sentencia emitida por un Juez de Distrito que reside dentro del ámbito geográfico donde este órgano Colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Revisión de presupuestos procesales previos al dictado de la sentencia en revisión

Los presupuestos procesales se cumplieron pues:

1. Firma del recurso. El escrito de agravios del recurso de revisión **se encuentra firmado**, en términos de lo previsto por los artículos **3, 80 y 88** de



la Ley de Amparo.¹⁴

2. Legitimación de la parte recurrente. La

parte recurrente se encuentra legitimada, pues es la quejosa [REDACTED]

[REDACTED] por conducto de su apoderada [REDACTED] personalidad que tiene reconocida a foja treinta y cinco y además resulta agraviada directamente con el sentido de la misma, en términos del artículo 5º, fracción I, 6 y 88, de la Ley de Amparo.

3. Oportunidad. El recurso se interpuso en

forma oportuna, porque el plazo de diez días para su interposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió conforme al siguiente cuadro:

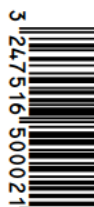
Sentencia recurrida	Fecha de notificación	Surtió efectos	Plazo de 10 días transcurrió	Fecha de presentación del recurso de revisión	Días inhábiles
Audiencia constitucional y sentencia dictada el 11 de marzo de 2019	12 de marzo de 2019.	13 de marzo de 2019. ¹⁵	Del 14 al 29 de marzo de 2019. ¹⁶	26 de marzo de 2019.	16, 17, 18, 21, 23 y 24 de marzo de 2019, por ser días inhábiles ¹⁷ .

¹⁴ Foja 16 del recurso de revisión.

¹⁵ Artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.

¹⁶ Artículo 86 de la Ley de Amparo.

¹⁷ Conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



4. Expresión de agravios. La recurrente expresó los motivos de inconformidad que estimó pertinentes.

5. Estudio oficioso del trámite del juicio de amparo indirecto. Se notificó de la admisión de la demanda a la quejosa y a la autoridad responsable, la que rindió su informe justificado con la anticipación necesaria para que las partes se pudieran imponer del mismo; se acompañaron las constancias suficientes para dictarse la sentencia de amparo indirecto respectiva y se observó que no existieran acciones u omisiones del Juez de Distrito que dejaran en estado de indefensión a la recurrente y que ameritaran la reposición del procedimiento, de acuerdo con lo señalado en los artículos **75**, tercer párrafo y **93**, fracción **IV**, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Procedencia del recurso

La revisión que nos ocupa **es procedente**, en términos de lo dispuesto por el artículo **107**, **fracción VIII**, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y **81**, fracción **I**, inciso **e**), de la Ley de Amparo; **al tratarse de una sentencia pronunciada por un de Juez de**



Distrito en la audiencia constitucional.

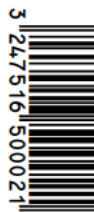
CUARTO. Precisión de la litis en revisión

La conforman los **agravios** propuestos por la recurrente, la **sentencia de once de marzo de dos mil diecinueve**, en la que el Juez de Distrito **negó el amparo solicitado por la quejosa**.

Luego, colmados los aspectos formales en el presente asunto, se procede a su estudio de fondo, para lo cual el magistrado relator entrega a los integrantes de este Tribunal, adjunto al proyecto respectivo, copia de los escritos de agravios, así como de la resolución recurrida.

QUINTO. Sentencia impugnada

La existencia de la resolución recurrida se acreditó con las constancias originales del juicio de amparo precisado, que remitió el titular del juzgado de Distrito de trámite; las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos **129, 197 y 202** del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral **2º**, por tratarse de actuaciones judiciales.



Sin que resulte necesario transcribir la parte considerativa de la misma, pues ello no lo exige la Constitución, ni la ley de la materia, y así deriva además de la interpretación consignada en la tesis de rubro: *“SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.”* (Registro IUS 175433).

Máxime que se ordena agregar como anexo al expediente en que se actúa copia certificada de la misma; y, el magistrado relator entrega a los integrantes de este Tribunal, adjunto al proyecto respectivo, copia simple de ella.

SEXTO. Estudio de la legalidad de la sentencia recurrida

I. Planteamientos de la parte recurrente

No se transcriben los conceptos de agravio expresados por la quejosa, ya que ni el artículo **74**, ni alguna otra disposición de la Ley de Amparo o de la técnica que rige al juicio de amparo lo exigen; además, que los principios de congruencia y

exhaustividad en las sentencias se satisfacen cuando, se precisan los puntos sujetos a debate derivados del escrito de expresión de agravios, se estudian y se les da respuesta.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”** (Registro IUS 164618).

Luego, colmados los aspectos formales en el presente asunto, se procede a su estudio de fondo, para lo cual el magistrado relator entrega a los integrantes de este Tribunal, adjunto al proyecto respectivo, copia simple del escrito de agravios.

II. Calificación de los argumentos propuestos en los agravios

Los argumentos contenidos en el único motivo de inconformidad son **inoperantes e infundados**, y por ende, ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida.

III. Respuesta a los argumentos planteados por la parte recurrente

A. Postura de este órgano colegiado

Se propone **confirmar** la sentencia recurrida toda vez que los argumentos en los que se alega que el juez de Distrito infringió los principios de legalidad, estricto derecho, debido proceso, certeza jurídica y exhaustividad, contenidos en los artículos **1º, 14, 16, 17 y 133** de la Constitución Federal, con relación a los artículos **8, 9, 25 y 68.1** de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, **17** de la Declaración Universal de Derechos Humanos, **14** del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, **26** de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y el artículo **XVIII** de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, son **inoperantes** porque los jueces de Distrito como órganos de control constitucional, al momento de resolver en los juicios de garantías no pueden vulnerar garantías individuales o preceptos constitucionales, toda vez que éstos ostentan el control constitucional.

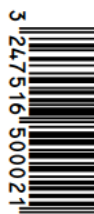


Por otro lado, es **infundado** lo relativo a la supletoriedad del Código de Comercio, esto porque al ser una norma especial el artículo **1175**, fracción **V**, del citado ordenamiento legal, excluye la aplicación de la norma general, como sería el artículo **86** de la Ley de Instituciones de Crédito.

B. Justificación

Así, en el **único motivo de inconformidad**, se alega en una parte que:

La sentencia recurrida fue emitida en contravención a los principios de legalidad, estricto derecho, debido proceso, certeza jurídica y exhaustividad, al infringir en perjuicio de la recurrente los artículos **1º, 14, 16, 17 y 133** de la Constitución Federal, con relación a los artículos **8, 9, 25 y 68.1** de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, **17** de la Declaración Universal de Derechos Humanos, **14** del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, **26** de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y el artículo **XVIII** de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.



Cita las tesis de rubros:

“EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”.

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO ARGUMENTE INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN AQUÉLLOS MENCIONE CUÁLES FUERON LAS CONSIDERACIONES OMITIDAS”.

Dicho argumento es **inoperante**.

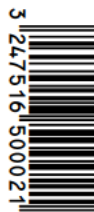
Lo anterior, porque es de explorado derecho que los jueces de Distrito como órganos de control constitucional, al momento de resolver los juicios de garantías no pueden vulnerar preceptos constitucionales o Tratados Internacionales; su labor es salvaguardar y resguardar derechos fundamentales y por tanto, tales cuestiones no pueden ser examinadas en esta instancia, dado que de lo contrario se desnaturalizaría el juicio de amparo, que es la vía idónea establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de los actos de autoridad.



En otras palabras, no se puede decir que un juez de Distrito vulnere derechos fundamentales o preceptos constitucionales, porque precisamente ellos ostentan el control constitucional y sería incongruente que pudiera ejercerse un control constitucional sobre otro de la misma naturaleza; en tal entendido a través del presente recurso de revisión no deben analizarse los agravios consistentes en que se vulneraron garantías de legalidad y debido proceso, porque si así se hiciera, se trataría indebidamente al órgano de amparo como autoridad responsable, razón por la cual es inoperante lo alegado en ese aspecto.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P./J. 2/97, en la página 5, del Tomo V, correspondiente al mes de Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente:

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como



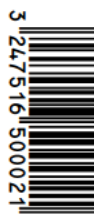
aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un



control constitucional sobre otro control constitucional”.

En la otra parte del único motivo de inconformidad, se dice que el Juez de Distrito al ordenar que la quejosa debió exhibir la garantía a la que alude la fracción **V** del artículo **1175** del Código de Comercio, pasó por alto que la presunción establecida en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que se señala que las instituciones de crédito tienen acreditada solvencia económica por lo que no están obligadas a exhibir garantía, es aplicable a los juicios y procedimientos mercantiles, por lo que únicamente se necesita acreditar que se trata de una institución de crédito como es el caso de la recurrente.

Señala que el artículo 1063 del Código de Comercio establece que los juicios mercantiles se rigen por el Código de Comercio y las leyes especiales en materia de comercio por lo que las instituciones de crédito se regulan por la Ley de Instituciones de Crédito, la cual es una ley especial de comercio y es aplicable a los juicios mercantiles. Apoya su dicho en el criterio de rubro:



“SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE”.

Argumenta que el juez de Distrito omitió tomar en cuenta lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, ya que el artículo 1063 de la citada legislación, prevé la aplicación supletoria en primer término de las leyes especiales en materia de comercio, como es la Ley de Instituciones de Crédito, así como el ordenamiento de la materia prevé el género de la institución jurídica en estudio, esto es, la acreditada solvencia de la recurrente por formar parte del Sistema Bancario Mexicano y no encontrarse en quiebra o liquidación; y ya que el Código de Comercio no señala con claridad que las Instituciones Bancarias con acreditada solvencia económica están exentas de garantías por daños y perjuicio a terceros, es que debe aplicarse la supletoriedad.

Aduce que el Máximo Tribunal del País puntualizó que en ausencia de regulación de una institución procesal, acorde a lo dispuesto en el

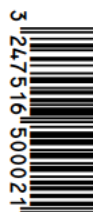


artículo 14 constitucional, los juzgadores están autorizados para acudir a los “principios generales del derecho” para resolver toda clase de controversias del orden civil, y el artículo 17 constitucional prevé el derecho de toda persona a que se le administre justicia pronta y expedita.

Señala que por lo expuesto es que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, encuadra en la hipótesis de aplicación supletoria, debido a que al ser la recurrente integrante del sistema financiero mexicano y no estar en quiebra o liquidación, queda exenta de exhibir garantía.

Cita las tesis de rubros: **“PRINCIPIO DE ERICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL.”**, y **“JUICIO DE AMPARO. ES UN MEDIO PARA EL CONTROL DE LA LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD.”**

Finalmente, refiere que el Juez de Distrito tiene un erróneo concepto de lo que es una institución de crédito al sostener que al ser las mismas banca de



desarrollo o banca múltiple, forman parte de la Administración Pública Federal.

Lo anterior es **infundado**.

Esto porque, como correctamente lo determinó el juez de Distrito la Ley de Instituciones de Crédito no es aplicable supletoriamente al Código de Comercio tratándose de las providencias precautorias (retención de bienes) en relación a la garantía a que se refiere la fracción **V** del artículo **1175** del referido código, que debe exhibir la institución bancaria recurrente.

Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 389/2009, a la que refiere la recurrente en sus motivos de inconformidad, sostuvo que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede cuando existe omisión en la ley, para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes y señala o los requisitos necesarios para que opere la supletoriedad que son:



a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad.

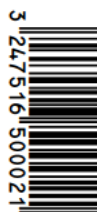
b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente.

c) Que la omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado.

d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir.

Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Página: 1065, que dice:

“SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a)



El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate”.

Por su parte el artículo 1176 de Código de Comercio establece que la retención de bienes como providencia precautoria deberá regirse, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles y que el otorgamiento de la garantías a que se refiere el artículo 1179 de ese Código, se deberá hacer conforme a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa y en caso de que exista oscuridad o insuficiencia conforme a los principios generales del derecho.

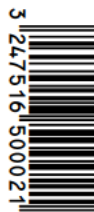
De lo anterior se desprende que para que estemos en el supuesto de supletoriedad, es necesario que el ordenamiento a suplir **no establezca**



expresamente la cuestión por suplir, lo que en el caso no acontece ya que el Código de Comercio es claro en la fracción **V** del artículo **1175**, al establecer que el solicitante de las providencias precautorias debe de exhibir la garantía que respalde los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a terceros, sin que en dicho precepto exista obscuridad o insuficiencia.

Ahora bien, como lo señaló el juez de Distrito en la sentencia reclamada, no resulta aplicable de forma supletoria al Código de Comercio la Ley de Instituciones de Crédito, en cuanto a la garantía que debe exhibir el solicitante, dado que existe **disposición expresa** en el sentido de que la procedencia de las providencias precautorias queda condicionada a que se cumpla el requisito sine qua non, consistente en que la parte que solicita la retención de bienes garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida al deudor en cualquiera de los supuestos previstos en la propia ley.

Del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito que establece:



“Artículo 86. Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.”

Se advierte que como regla general basta con que la Institución bancaria no esté en liquidación o en procedimiento de quiebra, existe la presunción de que tienen acreditada solvencia y que por ello no está obligada a exhibir garantía, lo que no es aplicable al caso de manera supletoria al Código de Comercio, debido a que no está estipulado en la ley especial que regula los procedimientos mercantiles.

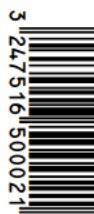
Por lo que, si bien es cierto, la Ley de Instituciones de Crédito forma parte del sistema jurídico en materia mercantil, pero ello no lleva a que la institución bancaria recurrente quede exenta de la obligación de exhibir la garantía solicitada por el juez responsable, ya que en este caso no se actualiza la supletoriedad de la Ley de Instituciones de Crédito al Código de Comercio, el cual en su artículo **1175** regula los requisitos específicos que tiene que cumplir quien solicite la medida precautoria, la cual no prevé



excepción alguna atendiendo a la naturaleza jurídica de la parte que la solicita ni a ninguna otra circunstancia.

Por su parte, el artículo **86** de la Ley de Instituciones de Crédito no contempla una excepción para los requisitos establecidos en el procedimiento de las medidas precautorias, con independencia de que tenga acreditada o no la solvencia económica la institución bancaria, tratándose del procedimiento de solicitud de medidas precautorias, (retención de bienes) el solicitante está obligado, en todos los casos, a garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros.

La Ley de Instituciones de Crédito fue creada para regular el sistema bancario en México en lo concerniente a la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que podrán realizar, así como su sano y equilibrado desarrollo; pero es independiente de las reglas procesales que rigen los juicios y procedimientos mercantiles en los que un banco sea parte.



En ese tenor al ser una norma especial el artículo **1175** fracción **V** del Código de Comercio, excluyen la aplicación de la norma general, que sería el artículo **86** de la Ley de Instituciones de Crédito; por lo que tratándose de normas procesales, se debe estar a lo que expresamente dispongan las primeras al momento de regular la procedencia de los juicios o procedimientos de que se trate.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la tesis I.13o.A.16 K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1391, del Tomo XVI, Agosto de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

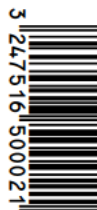
“SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO DEBEN CONSTITUIR GARANTÍA PARA OBTENERLA. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el juicio de amparo se sujetará a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley. Lo anterior implica que todas las reglas que rigen al juicio de garantías deben estar contenidas en un solo ordenamiento pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de que cada ley pudiera establecer la forma en que su propio contenido y los actos de ella derivados se deben someter al control de constitucionalidad que



representa el juicio de amparo. Por tanto, si bien es cierto que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que los integrantes del Sistema Bancario Mexicano no están obligados a constituir garantía para obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo, dada su acreditada solvencia económica, también lo es que dicho precepto, por estar previsto en una ley diversa a la Ley de Amparo, no es susceptible de constituir una excepción a la regla general contenida en el artículo 5 de dicho ordenamiento, el cual establece que siempre que puedan ocasionarse daños y perjuicios a terceros, el quejoso deberá constituir garantía para obtener la suspensión del acto reclamado”.

Por lo que hace a su argumento relativo a que el juez de Distrito tiene un erróneo concepto de lo que es una institución de crédito para el caso no es relevante si la institución de crédito forma o no parte de la Administración Pública Federal, sino como ya se mencionó lo importantes que conforme al Código de Comercio, para decretar la providencia precautoria de retención de bienes, la parte que lo solicite debe cumplir, necesariamente, con el requisito a que se refiere la fracción **V** del artículo **1175**, del citado ordenamiento.

Finalmente, no resultan aplicables al caso los criterios invocados por la recurrente de rubros: “SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE”; “PRINCIPIO DE ESTRICTO



DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL”, y “JUICIO DE AMPARO. ES UN MEDIO PARA EL CONTROL DE LA LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD”, debido a que en nada beneficia sus pretensiones.

Consecuentemente, al resultar **inoperantes** e **infundados** los motivos de agravio hechos valer por [REDACTED]

[REDACTED] por conducto de su apoderada [REDACTED], y sin que en la especie se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo **79** de la Ley de Amparo, para que de oficio, se deba suplir la deficiencia de la queja, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida.

C. Conclusión

En tales circunstancias, toda vez que lo aducido por la recurrente no resultó eficaz para demostrar que la sentencia recurrida sea ilegal, lo que procede es **confirmar la sentencia** emitida en el juicio **123/2019-III**, que **negó el amparo**.



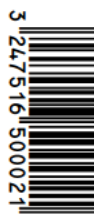
Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos **77 a 79, 90, 184, 188, 190 y 192** de la Ley de Amparo; **34 y 35**, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se **CONFIRMA** la resolución dictada en la audiencia constitucional celebrada el **once de marzo de dos mil diecinueve**, por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto **123/2019-III**.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] por conducto de su apoderada [REDACTED] contra el acto del Juez Noveno de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, consistente en la resolución interlocutoria de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente **2606/2018**.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad que



los remitió, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Ana María Serrano Oseguera, Marco Polo Rosas Baqueiro y Gonzalo Hernández Cervantes, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman la presente resolución ante la Secretaria de Acuerdos que da fe.-

LIC. ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA.

MAGISTRADA PRESIDENTA.

LIC. MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO.

MAGISTRADO PONENTE.

LIC. GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES

MAGISTRADO.

LIC. MARÍA ANTONIETA SOLÍS JUÁREZ.

SECRETARIA DE ACUERDOS.

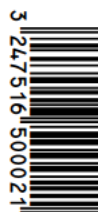
Última hoja de la sentencia pronunciada el trece de junio de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión R.C. 118/2019. Conste
MAEM/vho.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocumentoRespuesta.pdf
Secuencia: 3140115

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a una copia simple.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	EMMA RIVERA CONTRERAS	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RICE740711MQTVNM09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66000000000000000000000000d958	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	02/03/2020T20:13:33Z / 02/03/2020T14:13:33-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	2b 52 28 10 fa 89 5a 3b e7 86 05 d1 bd d6 98 3f b1 f4 7e e1 3a 74 7c 9c ec cb 91 b0 30 5e 35 7c 0f b8 00 ae b1 bb 9c 6a 3c af 12 19 79 32 76 b3 c4 56 4a 5e 9d 57 e1 c9 95 4c 2d a5 5c 28 e6 9d 6c a6 8a e5 69 b6 85 d4 22 c6 c7 d4 65 af 27 79 c0 ad d1 d9 6e 97 bd 87 c9 3a 27 08 2b f3 c0 9c a7 6f a2 e7 eb b9 cc 64 63 78 0e 3c e5 8a 42 2b 83 be d7 47 41 17 fc a1 a2 f5 af 61 ab 82 a2 14 79 d3 e2 33 70 31 45 03 08 12 46 a0 ae 8f a5 c2 9b 78 33 12 cb aa 32 53 3f f7 cc 50 fb 8d 5d 1b 3e a6 81 57 bc 8f 01 cb 4c 6d ff 01 99 3f 18 7a 23 86 df 46 73 23 b9 c7 c8 ca 05 2a 9f 4a b8 e3 1c cb 23 f2 d5 22 d6 ed 5a a1 9f 7c 65 d4 c2 6f f0 cd bf 2f 4f 96 e8 0d f7 ad 25 03 ef 12 82 ec be 45 64 3a b5 71 e6 b1 04 f1 38 b3 f6 f2 e6 28 b9 6a 5b 87 3c 8a 3e e6 83 e7 a5 21 39 08 31 98			
Validación OSCP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	02/03/2020T20:12:47Z / 02/03/2020T14:12:47-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OSCP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OSCP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OSCP:	706a6620636a66000000000000000000000000d958			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	02/03/2020T20:13:33Z / 02/03/2020T14:13:33-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3144062			
	Datos estampillados:	5359E20EA19962D982858C3A65B5EE7F189FE505			